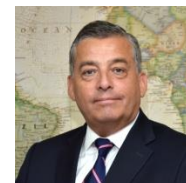


PAZ PARA COLOMBIA... ¿PAZ PARA SUDAMÉRICA?



Jorge Gatica Bórquez
Editor Panorama de S&D

De la gran variedad de tragedias que pueden azotar a un pueblo, una de las peores es una guerra interna. En efecto, un conflicto armado entre hermanos no solo es dramático en sí mismo, sino también genera profundos quiebres en la esencia de una nación, asumido este concepto en sus dos acepciones más reconocidas: en su connotación jurídico-política, al implicar un cisma institucional que compromete la seguridad y el desarrollo; y en su sentido social, al producir divisiones en una comunidad humana que por diversas razones había asumido el compromiso tácito de labrar juntos su futuro en un marco de solidaridad y respeto mutuo.

Esa ha sido la desdicha del pueblo colombiano durante más de medio siglo. Una guerra fratricida –la más antigua del hemisferio– que según cifras oficiales hasta el año 2012 había costado cerca de 220.000 muertos, de los cuales el 81,5% corresponde a civiles y solo un 18,5% a combatientes¹.

Casi 60 años de guerra

Aunque parte de la bibliografía sitúa el origen del conflicto en el año 1958, con la fundación del Frente Nacional y el potente efecto político que tuvo el fracaso de la reforma a la estructura de la tenencia de la tierra, es posible encontrar imbricaciones importantes con lo ocurrido en los años inmediatamente anteriores. En efecto, la dura confrontación política que caracterizó a Colombia durante el siglo XIX e inicios del XX, tuvo su culminación entre mediados de la década del 40 y el año 1958.

Durante esos años, conocidos como “La Violencia”, se dio una cruenta lucha entre los *conservadores* y *liberales*, la que alcanzó características de nítidas acciones armadas a partir del año 1953, cuando fue derrocado el presidente Laureano Gómez por el general Gustavo Rojas Pinilla. La radicalización se hizo aun más extrema con la politización de las Fuerzas Armadas y el apoyo a la postura conservadora de la Iglesia Católica; las masacres, los asesinatos, las persecuciones y la destrucción y apropiación de bienes materiales se convirtieron en prácticas habituales de ambos

¹ GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. Consultado en línea el 14 de agosto de 2018, en <http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf>

bandos dejando más de 200.000 muertos. Por otra parte, las operaciones militares en contra de las agrupaciones violentistas que abrazaban la causa comunista, llevadas a cabo a partir de 1955, les dieron a estas el pretexto para crecer y fortalecerse, llegando a constituirse en organizaciones guerrilleras revolucionarias.

Con la firma del pacto entre ambos partidos rivales en 1958, que creó el Frente Nacional, se pretendió resolver en lo inmediato el problema central, que era este enfrentamiento político bipartidista. Sin embargo, la polarización era muy profunda y las heridas ya estaban demasiado abiertas: las acciones militares destinadas a eliminar las fuerzas subversivas solo habían generado mayor resistencia y reacciones. En lo político, como ya antes se enunció, las medidas tendientes a resolver problemas sociales históricos, relacionados con la posesión de la tierra y la reivindicación de derechos de los campesinos frente a los dueños de esta, fracasaron.

Es así como la guerra tomó un carácter subversivo en una primera etapa que se inicia en 1958. La lucha violenta entre los partidos políticos dio paso a la masificación de la guerrilla. Ya con Alberto Lleras Camargo en la presidencia, se produciría el asesinato de Jacobo Prías Alape (conocido como Charro Negro), líder comunista de gran relevancia durante “La Violencia”. Esto motivó el regreso a la lucha armada de varios antiguos dirigentes que habían sido amnistiados –entre ellos Pedro Antonio Marín, mejor conocido como *Manuel Marulanda Vélez* o *Tirofijo*– quienes constituyeron la República de Marquetalia; en esta área y otros territorios proclamaron el no reconocimiento de la autoridad del Estado y fundaron en 1964 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En este periodo, muy marcado por la lógica de la Guerra Fría, se mezclaron las ideologías, las reivindicaciones sociales, las luchas de poder y ambiciones personales, como también el secesionismo y la delincuencia. El gobierno, ante la imperiosa necesidad de recuperar la autoridad y ejercer la soberanía en las áreas que se habían declarado “zonas liberadas”, recurrió a la asesoría militar de EE.UU. En ese primer periodo de la guerra, que duraría hasta 1982, surgieron otros grupos menores de extrema izquierda, tales como el Ejército de Liberación Nacional (1962) y el Ejército Popular de Liberación (1967), fuertemente inspirados por la revolución china y cubana. En lo urbano, particularmente en Bogotá, con una connotación y propósitos distintos, se haría conocido el M-19; posteriormente este movimiento también se iría a la guerrilla rural, en especial hacia el sur del país.

Desde 1982 se distingue un segundo periodo en el cual la guerrilla logra expandirse política y militarmente, alcanzando el control de mayores áreas de territorio colombiano. En un intento por obtener la paz, el gobierno del presidente Betancur organizó la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, la que suscribió con el Secretariado de las FARC los Acuerdos de La Uribe el 28 de marzo de 1984, acordando también el llamado Diálogo Nacional con el M-19, el EPL y con el movimiento de Auto Defensa Obrera.

Sin embargo, una nueva variable aparecería. Las dudas sobre el éxito del plan de Betancur en partes de la elite política y castrense, como también las dificultades del Estado para mantener el esfuerzo militar contra la guerrilla, motivaron la conformación de grupos de autodefensa amparados en la Ley 48 de 1968, una iniciativa que privatizó la lucha contrainsurgente y permitió la autonomía y la lucha clandestina de grupos radicales de las Fuerzas Armadas, que luego derivarán en fuerzas paramilitares antisubversivas.

Uno de los momentos más críticos en esta etapa y que marcaría el fracaso de las acciones destinadas a lograr la paz por parte del gobierno de Betancur, fue la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y su recuperación por el Ejército, en noviembre de 1985.

Para hacer aún peor el panorama, otro actor entró en escena en ese mismo periodo: el narcotráfico. Inicialmente se produjo la alianza perversa entre los narcotraficantes y los grupos irregulares de ambos bandos (la guerrilla de izquierda y los paramilitares de derecha), en la cual los primeros actuaban indistintamente como financistas de los segundos a cambio de protección para sus operaciones ilegales. “La penetración del narcotráfico en la organización paramilitar y los efectos que este tuvo sobre la naturaleza contrainsurgente de las autodefensas volvieron más complejo el conflicto armado, inaugurando tramas difíciles de diferenciar entre la guerra y la criminalidad organizada. El narcotráfico impactó tan decisivamente en la estructura paramilitar que en distintas regiones estos grupos se convirtieron en el brazo armado de los narcotraficantes”².

Pero a poco andar aparecieron otras aristas. Efectivamente, el auge de las plantaciones de coca llevó a una reconfiguración de uno de los problemas que originaron el conflicto: la propiedad de la tierra. Algunos estudios indican que hasta la primera mitad de los años 90 cerca de la mitad del territorio nacional colombiano era propiedad de los cocaleros.

Por otra parte, el floreciente negocio de la cocaína llevó la corrupción a la política y a todos los sectores y niveles de la vida nacional. Es esa condición, las acusaciones de financiamiento de campañas y de miembros del Estado cooptados por la mafia de la droga, debilitaron la acción oficial y quebraron las confianzas entre políticos, policías, jueces y militares. La mesa estaba servida para la siguiente cruenta fase de esta historia.

El tercer periodo abarca entre los años 1996 y 2005. Serían diez años de durísimos enfrentamientos armados, en una mezcla de combates entre las fuerzas del Estado, las guerrillas de izquierda, los paramilitares de derecha y el crimen organizado que mezclaba al tráfico de drogas y de armas, la extorsión y el secuestro, por nombrar los delitos más relevantes.

El Estado se debatió entre la crisis y la recomposición, la opinión pública se radicalizó y se inclinó hacia una solución militar definitiva del conflicto, la violencia urbana fue tan importante como la rural. Colombia se desangraba, mientras las presiones internacionales se hacían sentir. La crisis de legitimidad del gobierno de Ernesto Samper, acusado de haber financiado su campaña con dinero proveniente de la droga³, no le permitió avance alguno para solucionar el conflicto.

Los grupos paramilitares de derecha resurgieron con mucha fuerza, amparados en una figura legal que creó las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir)⁴. En 1997 se unieron 9 agrupaciones y fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las que acordaron un liderazgo centralizado con una estructura de asesoría militar, definiéndose a sí mismas como un movimiento antisubversivo y reclamando el derecho a la legítima defensa.

En 1999 las AUC se habían convertido en un verdadero ejército, practicando una brutal violencia para imponerse a la guerrilla de izquierda. Junto con ello, las ambiciones crecieron y comenzaron a pensar en una nueva forma de lograr el poder, como quedaría reflejado en el *Pacto de Ralito*, al que concurrieron funcionarios públicos y políticos. Su potente expansionismo territorial se

² Ibid. p. 145

³ Conocido como el Proceso 8.000

⁴ Decreto 356, de 1994

vería años después ratificado en la representación política que lograría⁵. Mientras los paramilitares dominaban el norte del país, la guerrilla lo hacía en el sur.

El gobierno de Andrés Pastrana intentó un acuerdo de paz, que fracasó y paradójicamente produjo un rebrote de las operaciones militares tanto de las FARC como de las AUC. Por otra parte, el contexto internacional del año 2001, marcado por el ataque a las Torres Gemelas, generó una particular sensibilidad de rechazo hacia los grupos terroristas, haciendo que el ya implementado Plan Colombia, destinado a potenciar a las Fuerzas Armadas, lograra mayor adhesión.

La llegada al poder de Álvaro Uribe en el año 2002 y su posterior reelección en el año 2006, fruto principalmente del éxito de sus políticas de Defensa y Seguridad Democrática, marcarían el inicio de la última fase de este conflicto. Este cuarto periodo se extiende entre los años 2005 y 2012, distinguiéndose por una potente ofensiva de las Fuerzas Armadas que logró debilitar pero no derrotar a la guerrilla, mientras se intentaba negociar con los grupos paramilitares. El fracaso de esto último produjo una reactivación de su accionar violento y una readecuación de su estructura, la que en estos años también se caracterizaba por su dinámica, su fuerte vínculo con el narcotráfico y una actitud más desafiantes frente al Estado.

Como en la mayoría de los casos, el inicio y evolución de esta guerra no tiene solo una causa: “Sus continuidades y cambios están relacionados con un sinnúmero de factores. Entre ellos se encuentran la persistencia del problema agrario; la irrupción y la propagación del narcotráfico; las limitaciones y posibilidades de la participación política; las influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación institucional y territorial del Estado. Finalmente, también han estado relacionados con los cambios y transformaciones del conflicto, los resultados parciales y ambiguos de los procesos de paz y las reformas democráticas”⁶.

Un largo camino a la paz

Después de muchos intentos hechos durante los años de guerra, varios de los cuales fueron en carácter de exploratorios o con fines más bien instrumentales, finalmente en febrero del año 2012 se reunieron en Cuba una delegación del gobierno de Santos y una representación de las FARC, la guerrilla más poderosa del continente. Luego de un proceso de negociaciones –que incluyó la redacción de un texto alternativo al original, ya que este no fue aceptado en el primer plebiscito– se firmó el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto entre el Gobierno de Colombia y las FARC; una semana después, el texto fue ratificado por el Senado y la Cámara de Representantes.

Más allá de los contenidos del acuerdo, no exentos de polémica, las grandes dudas permanecen en términos de la capacidad real del Estado de cumplir y hacer cumplir lo pactado. Hasta la fecha, ciertamente se ha logrado la desmovilización de gran parte de los guerrilleros de las FARC, no obstante, en marzo de este año fuentes oficiales colombianas reconocían que aún existían al menos 1.200 efectivos de esa organización, lo que sumado a otras facciones (incluidas herederas de las AUC), alcanzarían a un número estimado de 5.000 combatientes que se mantienen activos, pero no precisamente para luchar por causas que pudieron ser legítimas en su época, sino para apoderarse del control de las plantaciones de coca y los negocios del crimen organizado, entre los cuales ha surgido la minería ilegal del oro.

⁵ Para el año 2002, un tercio del Congreso provenía de las AUC.

⁶ GMH. Op. Cit. p. 111

Desde el año 2016, por orden del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas operan en subsidio de las fuerzas policiales para combatir a las Bandas Emergentes en Colombia o Bandas Criminales (BACRIM)⁷, las que han desarrollado fuertes vínculos internacionales. Su transnacionalización ha alcanzado a Venezuela, Brasil y Perú, con vínculos directos en las zonas fronterizas e indirectos con organizaciones criminales que operan en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México y Paraguay.

La superficie sembrada de coca y la producción derivada ha subido incesantemente en los últimos años. Desde el inicio de las conversaciones en el año 2012, el incremento en hectáreas cocaleras ha sido sostenido: 48.189 ha en el 2013; 69.320 ha en 2014; 96.084 ha en 2015 y 146.140 ha en 2016⁸. Y es obvio que sea así: mientras la hectárea de coca puede llegar a producir una ganancia de 15.000 dólares, esa misma superficie dedicada al cacao solo produce 1.600 dólares. Por otra parte, los planes de sustitución del gobierno no han logrado implementarse al ritmo de lo planeado. En el año 2017 solo se alcanzó un 30% de las 50.000 hectáreas que se esperaban reconvertir.

Los problemas sociales, tales como la extrema pobreza y la falta de oportunidades para la educación o la obtención de un trabajo digno, se mantienen latentes y generan las condiciones para levantar banderas de lucha reivindicacionistas, de la misma manera como ocurrió a principios del siglo pasado y que fue uno de los motivos que originó el largo conflicto que hoy se intenta resolver; por cierto, esto conlleva incertidumbre e inestabilidad. Como es posible suponer, la frustración y marginalidad son también explotadas por las BACRIM, las que encuentran en esta juventud una importante fuente de reclutamiento.

Reflexiones finales

La dramática historia de los últimos 60 años del pueblo colombiano es una tragedia para toda la comunidad sudamericana, con mayor o menor intensidad. Y refleja que los grandes problemas que se manifiestan o subyacen en la región deben ser abordados integralmente y de manera sistémica, en función de prevenir daños reales o potenciales que afectan o podrían afectar a la humanidad en su conjunto y al continente en particular.

Un claro ejemplo de lo anterior es lo que está ocurriendo con el narcotráfico y el crimen organizado, el que tuvo una gran incidencia en la larga lucha interna que remeció a Colombia. Los hechos indican que el plan de paz no resolverá este problema y las estadísticas son bastante elocuentes al respecto. Uno de los efectos colaterales de este plan ha sido el incremento de la producción de cocaína, tanto por la disminución de la fumigación aérea por razones ecológicas y de salud pública, como también para permitir la reconversión de las superficies agrícolas. Por otra parte, la notable disminución de las operaciones militares y la consecuente desmilitarización de las regiones cocaleras, han facilitado el resurgimiento de bandas criminales que están luchando por llenar los vacíos de poder que dejaron los grupos subversivos y paramilitares.

El lucrativo negocio está en la exportación a Estados Unidos, Europa o Asia, lo que debe hacerse por vía terrestre, aérea o marítima. En ese sentido, la región está comprometida en tanto se usan los diversos países como lugares de tránsito, como ya está ocurriendo; pero también hay

⁷ Conocidas oficialmente por el gobierno como Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) o Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).

⁸ Observatorio de drogas de Colombia, Ministerio de Justicia, Gobierno de Colombia. Consultado en línea el 22 de agosto de 2018 en <http://www.odc.gov.co/sidco/perfiles/estadisticas-nacionales>

efectos directos en lo que implica el peligro de corrupción en todas las áreas, organismos y niveles del Estado, como también en la extensión de los tentáculos del crimen organizado hacia los países vecinos.

Por supuesto, no hay duda de la necesidad de pacificar Colombia y de lo bienvenida que es cualquier iniciativa destinada a lograr su estabilidad y desarrollo. Pero hay que mantener observación sobre los fenómenos que acompañan dicho proceso y las eventuales implicancias que podrían tener para el resto del continente. Asegurémonos que la paz para Colombia traiga también paz a la región.